

HACIA EL NUEVO PARADIGMA DEL CRIMEN ORGANIZADO CORPORATIVO EN PERÚ: LA PERSONA JURÍDICA COMO GARANTE INSTITUCIONAL FRENTE A INSTITUCIONES ASOCIALES

TOWARDS THE NEW PARADIGM OF CORPORATE ORGANIZED CRIME IN PERU: THE LEGAL ENTITY AS AN INSTITUTIONAL GUARANTEE AGAINST ASOCIAL INSTITUTIONS

Dereck Patrick Palomino Campomanes*

Universidad Nacional Federico Villarreal

Álvaro Isidro Mejía Fabián**

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

This article aims to establish restrictive criteria on the corporate criminal catalog included in Law 30424 to provide valid selection criteria based on political-criminal and dogmatic foundations that determine a coherent systematic in the criminal liability regime of legal entities. In particular, the plausibility of organized terrorist crime applied to companies' criminal liability will be delved into as an example for a restrictive analysis of the selection criteria.

To verify the viability of the restrictive parameters, the analysis will focus on a three-coordinate reference system (perpetrator-act-victim), which will be complemented with the substantive elements of the legal entities imputation system to establish regulatory limits. Finally, a normative conception of the institutional dimension of the legal entity will be proposed, demonstrating its capacity to perform against asocial institutions, in other words, institutions that operate beyond the rules.

KEYWORDS: *Corporate crime catalogue; companies' criminal liability; deficient communication; associative crimes; terrorist organized crime.*

Este artículo tiene como objetivo establecer criterios restrictivos sobre el catálogo delictivo empresarial comprendido en la Ley 30424 a efectos de proporcionar criterios de selección válidos sobre la base de fundamentos político-criminales y dogmáticos que determinen una coherente sistemática en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En específico, se profundizará sobre la plausibilidad del crimen organizado terrorista aplicado a la responsabilidad penal corporativa como ejemplo para un análisis restrictivo sobre los criterios de selección.

Para comprobar la viabilidad de los parámetros restrictivos, el análisis se centrará en un sistema de referencia de tres coordenadas (autor-hecho-victima), que será complementado con los elementos sustantivos del sistema de imputación de empresas para establecer límites normativos. Finalmente, se propondrá una concepción normativa sobre la dimensión institucional de la persona jurídica, demostrando su capacidad de rendimiento frente a instituciones asociales, es decir, aquellas que operan al margen de las reglas de la sociedad.

PALABRAS CLAVE: *Catálogo delictivo empresarial; responsabilidad penal corporativa; comunicación deficiente; delitos asociativos; crimen organizado terrorista.*

* Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Investigador principal del Grupo de Investigación de Derecho Penal, Derechos Humanos y Gobernabilidad en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Adjunto de docencia en la cátedra de Derecho Penal Parte General y Especial en la misma casa de estudios. Excoordinador académico y miembro principal del Taller de Dogmática Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asociado del Seminario Lector de Jóvenes Investigadores en Derecho Penal y Ciencias Penales en Perú. Código ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4774-0669>. Contacto: dereck_palomino@hotmail.com

** Estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Coordinador General y miembro principal del Taller de Dogmática Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asistente de cátedra de Derecho Penal II- Parte Especial I en la misma casa de estudios. Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3296-4691>. Contacto: alvaromejiabian@gmail.com

Nota del Editor: El presente artículo fue recibido por el Consejo Ejecutivo de THÉMIS-Revista de Derecho el 16 de julio de 2024, y aceptado por el mismo el 30 de septiembre de 2024.

I. INTRODUCCIÓN

En el estado de cosas actual, el fenómeno global de la criminalidad organizada, de carácter proteico, polimórfico, complejo y sumamente cambiante, se compromete con mayor seriedad en construir barreras difícilmente franqueables para la justicia; esto con la finalidad de eludir cualquier forma de responsabilidad. Al mismo tiempo, debido al mayor involucramiento de las grandes empresas en los diversos sectores de la sociedad, las organizaciones criminales encuentran en las entidades corporativas a un actor preferencial o ‘cooperador necesario’ para generar oportunidades de legitimación y lubricación sobre sus prácticas organizacionales subrepticias. Esto les permite enquistarse dentro de la actividad económica globalizada, aprovechando sus características, como la creciente complejidad tanto interna como externa de las relaciones intersubjetivas, y del desarrollo tecnológico y profesional, para camuflar actividades delictivas, blanquear bienes de origen ilícito, consolidar patrimonios ilegales y servirse de su ‘manto protector’ para ocultar a los verdaderos protagonistas de obras delictivas (Neira, 2021, p. 171).

De esta manera, la criminalidad organizada, definida como una forma de criminalidad o *modus operandi*, crea nuevas modalidades delictivas valiéndose de la connivencia, contubernio o colaboración de estructuras empresariales complejas. Esto dificulta la tarea de identificar y sancionar la creciente criminalidad empresarial asociada al crimen organizado, es decir, a ‘la criminalidad corporativamente organizada’ que representa el actual paradigma de los criterios de imputación organizativos.

Ante esta nueva dinámica política-criminal proyectada en el ámbito normativo del binomio: organización lícita (persona jurídica) y organización ilícita (grupo delictivo organizado), la Convención de Palermo establece en su artículo 10 que **el crimen organizado de entes colectivos debe ser considerado como una de las formas de delincuencia de primer orden** (Carranza, 2021, p. 31), tornándose necesario adoptar programas que incluyan medidas de carácter penal sobre las actividades o estructuras corporativas para prevenir y combatir de manera eficaz la participación de las personas jurídicas en delitos graves en los que esté involucrado un grupo delictivo organizado.

Frente a estas dos realidades, la presente investigación tiene como objetivo general analizar la coherencia sistemática establecida en la Ley 31740, que modifica significativamente el catálogo delictivo empresarial comprendido en la Ley 30424. Para ello, las siguientes páginas justifican la postulación de un sistema de referencia basado en tres coordenadas (autor-hecho-víctima) como criterio político-criminal o parámetro restrictivo que debe guiar racionalmente los criterios de selección de los delitos comprendidos en el catálogo delictivo empresarial. Asimismo, se busca complementar su adaptabilidad sustantiva mediante los límites normativos del sistema de imputación penal de las corporaciones. De este modo, se buscará garantizar una coherente protección fáctica-normativa de determinados bienes jurídicos, en correlación con el merecimiento de pena contra las personas jurídicas por las conductas contrarias a las normas en el seno de su organización.

Además, como objetivo específico, se tomará como base de análisis teórico-práctico los criterios restrictivos a la —nominalmente— posible aplicación del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos de terrorismo (forma más grave del crimen organizado) regulados en el Decreto Ley 25475, a efectos de verificar si el recurso a un ‘post-Derecho penal’ resulta acertado como estrategia de lucha (preventiva) de un Estado garante o colaborativo contra la confluencia o conspiración entre empresas (garantes institucionales) y organizaciones terroristas (instituciones asociales).

II. ¿LAS PERSONAS JURÍDICAS PUEDEN RESPONDER PENALMENTE POR DELITOS ASOCIATIVOS?

A. Cuestiones político-criminales

Tradicionalmente, la confluencia delictiva entre criminalidad empresarial y criminalidad asociativa se encuentra estrechamente relacionada a la idea de peligrosidad objetiva de estructuras empresariales instrumentalizadas o inimputables, carentes de personalidad jurídica y suficiente sustrato material de complejidad interna y externa. En ese orden de ideas, inicialmente se encontró en las consecuencias accesorias (artículo 105 del Código Penal) una respuesta punitiva para imponer sanciones penales especiales¹ como solución de inocuidad radical de signo pragmático-preventivo

¹ Según el Acuerdo Plenario 1-2009/CJ-116, fundamento 11, las consecuencias accesorias tendrían la naturaleza de una sanción penal especial. Sin embargo, Hinojosa (2023, p. 97) señala que dicha innovación jurisprudencial no tendría asidero, ya que una sanción calificada como ‘penal’ debe seguir la línea de los principios de culpabilidad y legalidad. Además, estas no están comprendidas en el catálogo de penas del artículo 28 del Código Penal, por lo cual, para esta autora, las consecuencias accesorias serían medidas preventivas de carácter asegurativo.

(Silva, 1995, p. 364) contra la actitud criminógena de las sociedades de pantalla, fantasmas, estantería, fachadas, *off-shore* o puramente instrumentales creadas con una absoluta (o mayoritaria) finalidad delictiva.

Actualmente, las dinámicas de interrelación entre empresas económicas y organizaciones delictivas han evolucionado, al punto de no servirse exclusivamente de personas jurídicas inimputables² con una preeminente incardinación delictiva en su modelo de negocio o escrutinio material (Piña, 2023, pp. 21-22), sino de entidades corporativas imputables relacionadas ocasional y aisladamente a hechos ilícitos en las operaciones de su giro corporativo; es decir, empresas económicas con personería jurídica sobre las cuales nuestro ordenamiento jurídico-penal establece ciertos deberes de prevención.

Debe tenerse en cuenta que el término ‘criminalidad asociativa’ es empleado para hacer referencia al fenómeno delictivo organizado –no simplemente colectivo– que, a diferencia de la delincuencia común u ordinaria, tiene como fundamento el injusto sistémico³ (que emerge del sistema organizativo de la empresa). En la legislación peruana, este tipo de delitos se caracteriza por la presencia de la organización criminal (artículo 317) y la banda criminal (artículo 317-b), ambas previstas en el Código Penal, además de los delitos de terrorismo contemplados en el Decreto Ley 25475.

Esta manifestación de delincuencia se explica a partir del progresivo abandono de la supremacía general del autor individual que regía tradicionalmente en la teoría del delito y, concretamente, en el concepto del injusto penal. Esto ha llevado a que la dogmática tradicional evite, durante décadas, desarrollar una teoría del injusto del sistema –la cual responde a un paradigma de injusto de organización–, centrándose principalmente en las estructuras del injusto del individuo y no en las del sistema (Polaino-Orts, 2013, pp. 71-72).

En ese sentido, autores como Polaino-Orts han considerado a la organización terrorista como un sistema autónomo de lesión efectiva⁴ de bienes actuales, el cual se integra por la acumulación institucionalizada de aportes individuales, pero que constituyen una institución asocial viva y desestabilizadora de la personalidad en derecho (2013, p. 138).

En ese sentido, es innegable que la criminalidad asociativa encuentra en las corporaciones un incentivo para consolidar mecanismos de legitimación y lubricación sobre sus prácticas organizacionales subrepticias. Esto puede lograrse aprovechando su nivel operativo, como en el caso de empresas de transporte utilizadas para concretar la exportación e importación de drogas ilícitas; sirviéndose de la conformación de grupo de empresas para acceder a contrataciones públicas mediante actos de corrupción; o utilizándolas como brazos financieros mediante una serie de entramados societarios para promover el lavado de activos (Pauca, 2016, p. 276).

A esto puede sumársele el caso de las redes de trata de personas o turismo sexual, en el supuesto de que una empresa lícita acepte reclutar a potenciales víctimas ofreciendo falsas plazas de trabajo, mientras que otra entidad las transporta hacia un centro nocturno donde serán explotadas sexualmente (Ontiveros, 2020, p. 174), entre otros escenarios.

En estos casos, cuando la persona jurídica coopera con organizaciones terroristas, resulta fundamental reconducir el primer nivel de análisis hacia el estudio de los institutos dogmáticos de la imputación objetiva, pues, a primera vista, pudiese parecer que estos aportes sean comprendidos en el plano de la estereotipicidad (Mendoza, 2008, p. 57). Sin embargo, debemos tener en cuenta que cada una de estas colaboraciones serán penalmente relevantes cuando, en el caso concreto, sean entendidas como expresiones normativas que comunican un significado inequívoco de contubernio

² El auténtico problema sobre la determinación de la inimputabilidad corporativa es resumido de manera sublime por León (2022, pp. 5-6) al enfatizar que el *quid* del asunto es precisar cuándo podemos decir que la actividad ilegal de una empresa es más relevante que la legal, ¿esto se puede medir? El autor citado es crítico al enfatizar que en ningún precepto del Código Penal español se alude al grado de organización de la persona jurídica para incluirla o no en el sistema de atribución jurídico-penal, por lo que una visión dogmática al respecto no debe forzarse en detrimento de la ley, pues una cosa es interpretar la ley; y otra muy distinta, ¡inventársela!

³ Por todos, Lampe (2003, pp. 129-131) acuña el concepto de sistema social y autopoietico para el caso de organizaciones criminales, en tanto unidades autorreferenciales y autoorganizadas a través de acciones colectivas acumulativas realizadas por sus integrantes. En el caso peruano, sigue esta línea Yaipén (2020, pp. 380-381) que diferencia dos planos de la organización asocial, el plano organizativo y el plano personal, estando presentes en ambos los elementos de carácter personal, estructural, funcional, teleológico y temporal.

⁴ En la misma línea, Bocanegra (2020, pp. 98-99) sostiene que el delito asociativo lesiona la seguridad cognitiva-normativa que *hic et nunc* el grupo socialmente desestabilizador representa, además de afectar el correcto e imparcial funcionamiento de los servicios e instituciones públicas y de los mercados comprendidos como el orden público en su concepción institucional, de manera que nos situamos en un delito de carácter pluriofensivo.

esencial para la comisión de actos terroristas y los fines de la organización terrorista. Así, la *ratio essendi* de punir estas colaboraciones, descansa en impedir que las organizaciones terroristas puedan maximizar sus actividades ilícitas (Maza, 2023, p. 174); dicho de otro modo, no se buscaría más que ‘ahogar’ todas las posibles manifestaciones del terrorismo.

De los ejemplos anteriores, se desprende una notable connivencia de las personas jurídicas con preeminencia delictiva reducida o mínima, lo cual se traduce en un escrutinio material en el que los tipos penales (tráfico ilícito de drogas, corrupción pública, lavado de activos, trata de personas, etc.) cumplen solo una función esporádica u ocasional en el giro corporativo. Esto contrasta con una entidad comprendida como un ‘estado de cosas antijurídico’, donde la lógica punitiva se orienta a reaccionar frente a una peligrosidad objetiva y no a una mitigación preventiva.

En tal sentido, ante la infructuosa e incompleta política-criminal de paliar la criminalidad empresarial a través de consecuencias accesorias —a partir de la Ley 30424 del 21 de abril del 2016— el legislador peruano optó por establecer una estrategia de lucha preventiva contra la corrupción a nivel empresarial, incorporando el régimen de la responsabilidad de las personas jurídicas por comisión de delitos.

Posteriormente, con la Ley 31740 del 13 de mayo del 2023, a efectos de cumplir con el objetivo de mejorar el marco normativo anticorrupción impuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE⁵) y promover el buen gobierno corporativo, se modificó la Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal. Para lo que aquí interesa, se incorporaron diversos delitos asociativos en el catálogo delictivo empresarial; entre ellos, el tipo base del delito de terrorismo (artículo 2), colaboración con el terrorismo (artículo 4), afiliación a una organización terrorista (artículo 5), instigación (artículo 6), reclutamiento de personas (artículo 6-A), conspiración para el delito de terrorismo (artículo 6-B) y obstaculización de acción a la justicia (artículo 8) del Decreto Ley 25475.

No obstante, lo cierto es que dichas modificaciones legislativas obedecen a un marco político-criminal expansionista que no es patrimonio exclusivo o novísimo de nuestro ámbito normativo nacional, sino que es una técnica legislativa de la ‘Parte Especial del Derecho penal de asociaciones’. Esta última, a su vez, se replica en distintas legislaciones que, a nivel internacional, también se inspiran por el principio de excepcionalidad o *numerus clausus* al momento de establecer su catálogo delictivo empresarial, cuestión que será críticamente examinada.

Figura 1: Listado de delitos asociativos que conllevan a la responsabilidad penal de la persona jurídica en legislación comparada

Legislación	Delito asociativo	Normativa
Italia	Delitos de delincuencia organizada (artículo 24-ter).	Decreto Legislativo 231/2001.
	Delitos con fines de terrorismo o subversión del orden democrático (artículo 25 quáter).	
Portugal	Asociación criminal (artículo 299).	Código Penal portugués. (artículo 11.2) actualizado con la Ley 15/2024.
España	Organizaciones y grupos terroristas (artículo 571, artículo 572, artículo 573, artículo 575, artículo 576, artículo 577, artículo 578, artículo 579 y artículo 580).	Código Penal español (artículo 580 bis).
México	Terrorismo (artículo 139, artículo 139 bis y artículo 139 ter) y terrorismo internacional (artículo 148 bis, artículo 148 ter y artículo 148 quáter).	Código Penal Federal (artículo 11 bis).
Perú	Artículo 2, artículo 3, artículo 4, artículo 4-A, artículo 5, artículo 6, artículo 6-A, artículo 6-B y artículo 8 del Decreto Ley 25475.	Ley 30424 (artículo 1) modificada por la Ley 31740.

Fuente: Elaboración propia.

⁵ Para el caso peruano, la elección de tipos penales refleja el simple cumplimiento a ciertas exigencias de la OCDE, de modo que, aunque se haya ampliado el alcance de nuestra lista cerrada, razón no le falta a Rodríguez (2019, p. 233) al señalar con Feijoo Sánchez que sería adecuado que se intente aplicar nuestro catálogo delictivo de forma restringida a ciertos ámbitos especialmente sensibles, restableciendo deberes de colaboración con el Estado en la prevención de delitos circunscritos a los ámbitos más sensibles.

En el caso peruano, estas y otras modificaciones introducidas con la Ley 31740 implican un serio problema, puesto que los delitos seleccionados en nuestra normativa de delitos empresariales no obedecen a un fundamento político-criminal con amplia base sólida de racionalidad como para establecer criterios restrictivos uniformes en los procesos de selección. Además, carecen de un soporte empírico-social contundente, respaldado de estudios criminológicos previos, lo cual resulta en un marco normativo que, inevitablemente, se circunscribe a políticas legislativas tendientes a un maximalismo punitivo sin fundamentos de selección que legitimen jurídico-políticamente la punibilidad de organizaciones empresariales. Esto ocurre a expensas del respeto irrestricto de los principios de *ultima ratio*⁶, subsidiariedad, proporcionalidad y necesidad de pena para paliar la criminalidad empresarial (Wohlers, 2023, p. 146).

En relación con lo anterior, cierto sector de la doctrina alza eco en afirmar que la criminalidad corporativa de índole sistemática no se agota en actos jurídicos delictivos de la empresa, sino que se extiende a vulneraciones de bienes jurídicos de todo tipo, de modo que no debiera limitarse únicamente al ámbito del Derecho penal económico (Schmitt-Leonardy, 2023, p. 326). Por ello, no resulta extraña la idea de autores como Dannecker que sostienen que el ente colectivo puede lesionar toda ley penal, siempre que la lesión del bien jurídico entre en el ámbito de responsabilidad del colectivo (2023, p. 157).

Como podrá advertirse, se postula la innecesariedad de restringir la responsabilidad penal-corporativa a delitos socioeconómicos, pues también serían imaginables supuestos de lesiones, homicidios, ofensas y otros tipos penales que partan del colectivo por una supervisión o control no acordes con los deberes imponibles a las empresas.

En *contrario sensu*, somos de la opinión que, en principio, debiera partirse de criterios político-criminales restrictivos para determinar los tipos penales que puedan o no ser atribuibles a las personas jurídicas.

Al respecto, como *quid* del asunto, nos cuestionamos: ¿es político-criminal y dogmáticamente viable que las personas jurídicas puedan y deban responder penalmente por todos y cada uno de los delitos de la Parte Especial? Es importante traer a

colación lo sostenido por Salazar al momento de enseñar una respuesta:

Es muy difícil encontrar coherencia y consistencia al contenido de las normas porque debe hacerse un análisis constitucional y democrático por mandato constitucional como columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico-político. Solo una legislación acorde a los principios constitucionales tendrá ribetes de coherencia lógica y teleológica que pueda dar pie a la construcción de una dogmática constitucional con ribetes de cientificidad. Desde el punto de vista político-criminal, el legislador debe diseñar una política criminal en función de los principios, axiomas o máximas que estructuran nuestro sistema jurídico-político, sino se tiene idea de principios constitucionales, entre otros, no se va a poder diseñar una política criminal racional coherente y consistente. ¿Nuestros legisladores están en capacidad de exigir ello? No [...] pues no se puede tener racionalidad si no se tiene antes conocimiento, lamentablemente la facticidad nos dice otra cosa, no se puede legislar en función de ello. La única alternativa para tener una legislación racional es el conocimiento de los principios constitucionales. Sobre todo, llevar a la praxis dicho conocimiento teórico de la epistemología para no tener un sistema incoherente, incongruente e ilógico. (2023)

A decir verdad, en nuestro ordenamiento jurídico-político se utiliza el criterio generalizado de combatir la corrupción pública vinculada a empresas, sirviéndonos de políticas legislativas (vacías) como “cajón de sastre” para construir —o, mejor dicho, llenar— un CDE maximalista sin mayores fundamentos de selección, expandiendo el régimen de responsabilidad penal corporativa mediante un listado delictivo irregular o asimétrico.

De manera extraordinaria, este criterio generalizable es ‘mal’ utilizado por el legislador peruano para abarcar constelaciones poco comunes. En contra de esto, y con mayor fundamento, Kudlich (2013) sostiene que los criterios generalizables (como el marco normativo anticorrupción en nuestro caso) en favor de una específica necesidad de pena de las asociaciones por determinados delitos conducen forzosamente a que un catálogo construido mediante estos criterios no abarque determinadas situaciones poco convencionales (p. 275).

A nuestro parecer, este autor plantea un enfoque político-criminal restrictivo plausible para garan-

⁶ En contra del principio de *ultima ratio*, Ruiz (2017, p. 15) sostiene que en el caso de las empresas no se debe obedecer los lineamientos del Derecho sustancial represivo de las personas individuales, pues aquí se requeriría de una intervención máxima para solucionar los problemas de los ciudadanos, por lo que la *ultima ratio* en materia de responsabilidad penal de empresas cedería el paso de forma pacífica a una *prima ratio*.

tizar una coherente protección fáctica-normativa de determinados bienes jurídicos en correlato al merecimiento de pena por conductas contrarias a las normas atribuibles a las personas jurídicas. Este criterio político-criminal o parámetro restrictivo se basa en un enfoque de tres coordenadas, o dicho de otro modo, un sistema de referencia compuesto por el autor, el hecho y la víctima.

En primer lugar, en lo que respecta al autor, solo deberían incluirse en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas aquellos delitos que sean realizados de modo llamativamente habitual por los miembros de la organización y que estén vinculados fenomenológicamente en el desarrollo típico de la estructura empresarial. En segundo lugar, en cuanto al **hecho o conducta sistémica de la organización**, la responsabilidad y lesividad de carácter individual (fungible e intercambiable) deben difuminarse y evanecerse en el amplio espectro de procesos sistemáticos de la organización empresarial. Finalmente, con respecto a la **víctima o agresión del bien jurídico**, este debe ser merecedor de tutela fáctica-normativa como criterio legitimador de la pena estatal cuando sea especialmente propenso de ser lesionado mediante la conducta antinormativa que se le imputa a la organización empresarial.

Con la finalidad de comprobar la consistencia político-criminal de estos criterios de selección, aplicaremos dichos parámetros restrictivos en el régimen de responsabilidad penal corporativa por delitos asociativos –en particular, el crimen organizado con fines terroristas–, de modo que analizaremos cada una de estas coordenadas para evidenciar su plausibilidad a efecto de aceptar o rechazar su incorporación en nuestra legislación.

1. Referencia al autor

El artículo 3⁷ de la Ley 30424 establece que la persona jurídica será responsable por los delitos co-

metidos por: (i) sus socios, directores, administradores y representantes legales que incumplen sus deberes de supervisión, vigilancia y control (fundamento de la responsabilidad penal individual); y (ii) las personas naturales sometidas a su autoridad y control cuando hayan cometido delitos (por ejemplo, delitos de terrorismo) bajo órdenes o autorización de los mencionados en primer término.

En relación con lo anterior, el delito asociativo puede ser cometido por cualquier miembro de la persona jurídica dentro del marco típico del giro social o ámbito negocial de la empresa. De manera ilustrativa, los casos de mala organización y políticas delictivas (objetivos y propósitos de la empresa), a nivel corporativo, pueden posibilitar que sus miembros coadyuven a cumplir los fines de organizaciones terroristas, en específico, puede pensarse en los siguientes supuestos:

- a) Un directivo o subordinado viaja al extranjero por cuenta de la empresa para trabajar por y para ella. Sin embargo, aprovecha el viaje con la auténtica finalidad de capacitarse para cometer atentados terroristas, colaborar con organizaciones terroristas e integrarse en un comando.
- b) Un directivo o subordinado de la empresa, a cargo de las jornadas de formación al personal, instruye a los trabajadores incluyendo mensajes de enaltecimiento al terrorismo o menosprecio de sus víctimas.
- c) Un directivo o subordinado de una industria química utiliza las instalaciones y recursos de la empresa para desarrollar armas con finalidades terroristas.
- d) Directivos de la empresa aprueban políticas estratégicas de colaboración con las actividades de una organización terrorista con la finalidad de obtener una ventaja competi-

⁷ Artículo 3.- Las personas jurídicas son responsables administrativamente por los delitos señalados en el artículo 1, cuando estos hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto, por:

a. Sus socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales o apoderados de la persona jurídica, o de sus filiales o subsidiarias, bajo cualquiera de las modalidades de autoría y participación previstas en el Código Penal.

b. La persona natural que, estando sometida a la autoridad y control de las personas mencionadas en el literal anterior, haya cometido el delito bajo sus órdenes o autorización.

c. La persona natural señalada en el literal precedente, cuando la comisión del delito haya sido posible porque las personas mencionadas en el literal a. han incumplido sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre la actividad encomendada, en atención a la situación concreta del caso.

Las personas jurídicas que tengan la calidad de matrices serán responsables y sancionadas siempre que las personas naturales de sus filiales o subsidiarias, que incurran en cualquiera de las conductas señaladas en el primer párrafo, hayan actuado bajo sus órdenes, autorización o con su consentimiento.

Las personas jurídicas no son responsables en los casos en que las personas naturales indicadas en el primer párrafo hubiesen cometido los delitos previstos en el artículo 1, exclusivamente en beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la persona jurídica (2016).

va en el sector, posibilitando la generación de estragos en perjuicio de la competencia.

Si bien, los ejemplos anteriores están vinculados fenomenológicamente con el desarrollo típico de estructuras empresariales dedicadas a la producción, utilización y comercialización de armas, municiones, explosivos, sustancias químicas, material nuclear, biológico o ionizante, lo cierto es que, en nuestro contexto particular, estas industrias se encuentran escasamente desarrolladas como para ser susceptibles de colaborar significativamente en el desarrollo típico de los delitos de terrorismo. Esto, de algún modo, indica que el terrorismo no debiera ser considerado como un riesgo penalmente prohibido en ámbitos de producción, servicios, transporte o seguridad de las empresas por casos de políticas delictivas o mala organización, sino que, en realidad, estos supuestos no son realizados de modo ‘llamativamente habitual’ por miembros de entidades corporativas.

Frente a este panorama, resulta necesario verificar si los delitos de terrorismo incorporados a la normativa de delitos empresariales pueden acoplarse al sistema de la responsabilidad penal corporativa. Esto supone comprobar la adaptabilidad sustantiva de los delitos de terrorismo y definir en qué medida estas conductas contrarias a las normas también pueden ser atribuidas a una organización empresarial, es decir, corresponde definir cómo los miembros de la empresa pueden cometer delitos de terrorismo dentro de su giro social.

En ese sentido, para definir cómo el comportamiento de los miembros de una empresa puede subsumirse en una conducta típica de terrorismo, debe considerarse que un miembro podrá cometer delitos asociativos (terrorismo) si forma parte (*ad intra*) o colabora (*ad extra*) con una organización terrorista. Respecto a ello, el *quid* del asunto radica en determinar si un miembro de una organización empresarial puede ser paralelamente un integrante o colaborador de una organización terrorista con el propósito de cometer delitos asociativos, ya sea el tipo base de terrorismo (artículo 2), colaboración con el terrorismo (artículo 4) o afiliación a una organización terrorista (artículo 5), toda vez que estos connoten un injusto sistémico.

En la doctrina penal, no resultan pacíficos los criterios dogmáticos para determinar si una persona es miembro de una organización criminal (artículo 5) o simplemente un colaborador (artículo 4). Des-

de un punto de vista normativo, cabe entender que el sujeto es o no miembro de la organización terrorista, sin dejar espacio para posibilidades intermedias en estos casos de imputación sistémica (Yacobucci, 2005, p. 113).

Con todo, en estos casos de imputación sistémica por delitos de terrorismo, predomina la siguiente regla:

- a) Si el sujeto es miembro de una organización terrorista, entonces nunca actuará como ambiente del sistema asocial, pues su vinculación implica un arraigo temporal-funcional al interior de la organización, por lo que técnicamente su acoplamiento estructural significa ‘ser la carne de la organización’.
- b) Si el sujeto es un colaborador de una organización terrorista, entonces se limitará a favorecerla con aportaciones materiales, logísticas, anímicas, ideológicas o políticas, en tanto sean contribuciones periféricas provenientes de un tercero que fomenta el funcionamiento y permanencia de la organización terrorista.

De esta manera, por un lado, la distinción entre miembros y colaboradores se determina en términos cuantitativos, dependiendo del grado de integración⁸ en la organización. Se considera miembro quien ostenta un rol estable dentro del esquema organizativo a través de una contribución permanente e institucionalizada. Por otro lado, se entiende por colaborador a quien contribuye con actos accesorios o secundarios de carácter episódico y esporádico, justificados únicamente para legitimar la intervención del Derecho penal contra ‘los amigos de los enemigos’ (Llobet, 2020, pp. 183-190).

Sin embargo, lo cierto es que introducir parámetros temporales conducen a una nebulosa insalvable, en tanto sea imprescindible determinar normativamente estos esquemas para poder distinguir claramente entre ambos comportamientos típicos. Además, el rol no debería determinar necesariamente la categoría de intervención en el “núcleo duro” de la organización terrorista.

En realidad, no existirían diferencias entre *intra-neus* y *extraneus* del terrorismo organizativo, pues el hecho de integrarla con un grado mayor de ‘comunidad’ a sus fines o ‘comulgar’ periféricamente para alimentar sus actividades antijurídicas, impli-

⁸ Para nuestra jurisprudencia, el análisis sintáctico del verbo típico ‘pertenecer’ a una organización terrorista se determina a partir de las expresiones concretas que manifiesten un vínculo de integración permanente y estable a la organización terrorista. Sobre el particular, véase el Expediente 059-2015-0-0-5001-JR-PE-01 (caso Guillermo Bermejo).

ca forzosamente una vinculación con un sistema asocial que es hermético. Así, ambas categorías reflejan un conflicto frontal contra el modelo de orientación aceptado pacíficamente por los ciudadanos al buscar crear una expectativa personal de conducción de vida al margen de la validez del mundo normativo configurado por los demás participantes sociales (Santa Rita, 2012, p. 422).

Para lo que aquí interesa, difícilmente podría suscitarse que miembros de una organización empresarial puedan ser integrantes de una organización terrorista, y, en consecuencia, puedan cometer delitos asociativos. Esto se debe a que la organización empresarial a la que primigeniamente pertenecen es un **sistema de comunicaciones** que desarrolla sus actividades de producción de bienes y servicios en el **ámbito de la juridicidad** y es destinataria de un modelo de orientación aceptado y mantenido pacíficamente por sus miembros en un mismo **escalón comunicativo**. Es así como para alcanzar los objetivos del giro corporativo “el empresario es una especie de director de orquesta que tendrá la responsabilidad de llevar a buen puerto el proyecto musical que se ha planteado” (Santa Rita, 2012, p. 256).

El **modelo normativo de orientación**, configurado en el sector empresarial, tiene una determinada validez que lo hace irreconciliable con ‘el proyecto musical asocial’ de una organización terrorista como sistema penalmente antijurídico con un contenido comunicativo propio a la realidad viva de una institución antisocial (Polaino, 2009, p. 91), con fines espurios y disfuncionales que buscan subvertir el orden político constituido. Pretender lo contrario significaría descomponer el ámbito de licitud propio de una organización empresarial y transitar por una nebulosa inconmensurable de ilicitud.

A nuestro parecer, no sería jurídica/penalmente factible que los miembros de organizaciones empresariales sean paralelamente miembros o afiliados de una organización terrorista (artículo 5) que realicen delitos asociativos, pero sí sería posible que sean colaboradores (artículo 4) mediante actos periféricos (esporádicos y accesorios) que favorezcan a una organización terrorista y que, a través de estos, se comunique una aptitud de contubernio e interrelación con la organización empresarial para poderle atribuir el delito cometido por su miembro.

En definitiva, lo anterior no resulta irreconciliable con cada modelo normativo de orientación, toda vez que los miembros de una persona jurídica, al aceptar la validez del modelo normativo de orientación configurado en el sector empresarial, hacen suyas las expectativas de conducción de vida del giro social en tanto destinatarios de un escalón co-

municativo corporativo. Esto no impide, desde el punto de vista jurídico y fáctico, que estos puedan coadyuvar en las actividades antijurídicas de una institución asocial como lo son las organizaciones terroristas, siempre y cuando de ello resulte una relación de reciprocidad beneficiosa o una convivencia mutua. Esto sería posible en la medida que los miembros de la empresa no aceptarían necesariamente una expectativa personal de conducción de vida asocial (y su fuerte carga ideológica) propios del terrorismo.

2. Referencia del hecho o conducta sistémica de la organización empresarial

En relación con el apartado anterior, aquí corresponde determinar si la lesividad y responsabilidad individual de un miembro de la organización empresarial que realiza algún comportamiento típico (terrorismo) se difumina dentro de los procesos sistemáticos de la corporación. Para eso, se deberá establecer en términos conceptuales cuándo o cómo se configura el hecho o conducta sistémica de la organización empresarial, pues a partir de ello se comprobará la viabilidad de atribuirle o no el injusto sistémico de una organización terrorista.

En principio, líneas arriba hemos sustentado la posibilidad de la responsabilidad penal individual de miembros de una empresa por el delito de colaboración con el terrorismo. Esta solo podrá difuminarse dentro de los procesos sistemáticos de la corporación en tanto y en cuanto la comisión del delito asociativo simplemente signifique la materialización última de un defecto organizativo-estructural de la empresa.

Como se verá más adelante, la conducta sistémica que se atribuye a la persona jurídica no se identifica con los hechos delictivos o con la responsabilidad individual de sus miembros, pues nuestro sistema de imputación penal de empresas gira en torno a la idea de hacer responsable a las corporaciones por un injusto propio que explica el acaecimiento del delito de la persona individual.

Esta conducta sistémica solo será posible atribuir a estructuras empresariales complejas, pues solo en ellas será posible reconocer un basamento-prepositivo propio que no se derive de la mera suma de sus miembros o del punto de intersección en sus redes individuales (Schmitt-Leonardy, 2023, p. 328). Esto último implica que el ‘actor corporativo’ debe tener una suficiente complejidad organizativa a efectos de cumplir con ciertas condiciones mínimas de sustrato para ser pasible de personificación, de modo que no se la pueda identificar como una mera institución de recursos mancomunados, ni como colectivo o movimiento social.

En particular, la lesividad y responsabilidad individual del miembro de la empresa que comete un delito asociativo, se difumina en el defecto organizativo-estructural de la corporación, en tanto y en cuanto su colaboración con una organización terrorista comunique una aptitud de contubernio o connivencia a los fines terroristas al expresar el mensaje comunicativo: ‘contribuyo a organizaciones terroristas en beneficio de entidades legales porque tengo total libertad para cometer un delito sin consecuencias’. En otras palabras, ello significa que ‘puedo colaborar con organizaciones terroristas para beneficiar a la empresa, pues tengo el camino libre’, o ‘las políticas empresariales y mala organización me permiten delinquir’, de modo que esa contribución no sea explicada desde una dimensión puramente individual, sino, antes bien, desde un escalón comunicativo corporativo.

Solo de esta manera podremos decir que los actos de colaboración terroristas se pueden atribuir a una organización empresarial como parte de su conducta sistémica. Al no prevenir, detectar ni evitar estos comportamientos individuales, la empresa estaría posibilitando y favoreciendo la comisión de delitos asociativos, lo cual implica que ya no sea el miembro individual quien colabora; en cambio, sería la propia entidad corporativa la que comunica una aptitud de contubernio/connivencia para interrelacionarse con una organización terrorista.

Es este escalón comunicativo lo que constituye la identidad de una estructura empresarial colaborativa con el terrorismo, pues configura el diseño operacional y los canales de comunicación de la corporación para establecer vínculos o puentes con la finalidad de hacer más dinámicos y efectivos sus espacios de participación delictiva. En correlato, la organización terrorista comunica su aceptación y fomenta la continuidad de estas contribuciones, generando en las empresas una comunicación defectuosa determinada por patrones repetitivos y desviando su comportamiento estructural de lo normativamente correcto, hasta el punto de adoptar una actitud negativa.

Por lo tanto, si lo que se pretende evitar de raíz es que la conducta sistémica de las personas jurídicas no contribuyan material, económica o logísticamente en favor de las organizaciones terroristas,

la verdadera estrategia de lucha (preventiva) está en combatir la ‘comunicación defectuosa’ de las corporaciones. Esta comunicación defectuosa es la que permite encausar vínculos interpersonales y funcionales con instituciones asociales para materializar un programa delictivo. Al identificar esta comunicación defectuosa, se podrá evitar de manera eficaz y eficiente la producción de información relevante que desmitifica o encausa la materialización de hechos ilícitos y la expansión del perímetro criminal a nivel corporativo.

En este contexto, resultaría necesaria la intervención del Derecho penal para calificar como indebida esta comunicación defectuosa orientada a la formación de una actitud colaborativo-criminal de las corporaciones. El objetivo es evitar que las empresas adopten una postura inadecuada de connivencia asocial, contraria a su modelo de orientación normativo o conducción de vida empresarial funcional desde el ámbito de la juridicidad. De esta manera, se podrá cortar de raíz los vínculos delictivos que permiten desarrollar un trabajo delictivo-colectivo entre organizaciones empresariales y organizaciones criminales con fines terroristas (Carranza, 2024, pp. 452-453).

3. Referencia a la víctima o agresión al bien jurídico

Para que un tipo penal sea incorporado a nuestro catálogo de delitos empresariales, además de lo expuesto, deberá tener la capacidad de legitimar la intervención del Derecho penal a través de la pena estatal. Esto solo será posible en cuanto se determine el objeto de tutela especialmente propenso de ser lesionado por conductas contrarias a las normas, pues, dependiendo de la libertad jurídicamente garantizada que interese proteger, se podrá legitimar una protección fáctico-normativa que fundamente o no el merecimiento del castigo penal.

En ese orden de ideas, es preciso cuestionarnos si la libertad jurídica que se pretende garantizar en los delitos de terrorismo puede o no fundamentar el merecimiento y necesidad de una pena estatal para legitimar la intervención del *ius puniendi*.

En principio, según el artículo 2º del Decreto Ley 25475, en los delitos de terrorismo se tendría por

⁹ Artículo 2.-

El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad o de cualquier Estado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años (1992).

objeto de protección a la tranquilidad pública¹⁰, entendida como la confianza general en el mantenimiento de la paz social o la armónica y pacífica coexistencia bajo la soberanía del Estado y del Derecho (Castañeda, 2009, p. 11), por cuanto su grave alteración sería el objetivo de las actuaciones terroristas.

Al tenor de una proclamada ‘esclavitud’ del texto de la ley, los conceptos de ‘tranquilidad pública’ y ‘seguridad de la sociedad y del Estado’ no son más que conceptos vacíos o demasiado abiertos como para ser susceptibles de abarcar distintos objetos de protección, por lo que emprender su determinación será más que necesario.

Para esto, se debe reconocer que la tranquilidad o seguridad a la que aspira el Estado no queda reducida a un mero paquete o conjunto de medidas jurídicas, antes bien, ambos se refieren a un estado de paz real de la comunidad que comunica la consolidación de una confianza fundamental en la convivencia ciudadana reflejada en un estado de despreocupación que hace posible el transcurrir de la vida en libertad (Isensee, 2014, p. 73).

Desde una postura normativa, el objeto de protección en los delitos de terrorismo es **el orden público entendido en sentido jurídico-constitucional**, en tanto sea una entidad normativizada que no puede existir sin seguridad cognitiva. Esto hace posible que el contenido del injusto del delito de terrorismo se identifique como una institución asocial contra los sistemas democráticos, de modo que el terrorismo tenga un plus desvalorativo en comparación a la delincuencia común. Esto se debe a que cada uno de sus actos concretos contribuyen a la creación de una situación de miedo colectivo idóneo para alterar la normalidad de la convivencia ciudadana y el ejercicio de los derechos fundamentales (Llobet, 2008, p. 37).

De esta manera, las organizaciones de naturaleza terrorista tienen un elemento que permite diferenciarlos del resto de la delincuencia violenta: se dirigen a coaccionar a los gobiernos democráticos para que sucumban ante sus peticiones; a diferencia del crimen organizado dirigido a manipular el

orden político existente para conseguir diversos fines, las organizaciones terroristas van más allá, ya que no se contentan con la mera manipulación del sistema político para fines lucrativos, sino, en específico, persiguen la subversión política del país.

Esto nos permite afirmar que el objeto de protección atacado de forma indebida por el delito de terrorismo en los Estados democráticos sería triple: en primer lugar, el **bien jurídico concreto protegido por cada delito común** (vida, integridad física, libertad, etc.); en segundo lugar, la **paz pública** en su acepción de estado colectivo de tranquilidad y sosiego por la propia vida; y, en tercer lugar, las **vías democráticas de toma de decisiones políticas**, esto es, el poder del pueblo como único legitimado para decidir sobre el contenido de las leyes y de las políticas públicas, desde un plano simbólico (Llobet, 2008, pp. 38-40).

En ese orden de ideas, es preciso cuestionarnos si la libertad jurídica que se pretende garantizar en los delitos de terrorismo pueden o no fundamentar el merecimiento y necesidad de una pena estatal para legitimar la intervención del *ius puniendi*.

En consecuencia, habiendo identificado la naturaleza del objeto de protección en el delito de terrorismo, esto es, el orden público entendido como el estado de tranquilidad en sociedad¹¹, debemos advertir que se garantiza la seguridad como presupuesto fundamental de la libertad jurídica. De ahí que el ataque de forma indebida contra la seguridad implique una violencia institucionalizada¹² que tiene como objetivo político socavar y desestabilizar la forma de gobierno de una sociedad determinada. Con estas precisiones, corresponde fundamentar el merecimiento de pena para legitimar la intervención del Derecho penal en este ámbito delictivo, lo que a su vez hace compatible el reproche penal contra empresas que colaboran con organizaciones terroristas.

B. Cuestiones sustantivas

En relación con el acápite anterior, sumado a los criterios político-criminales antes referidos, al momento de seleccionar determinados tipos penales

¹⁰ La Corte Suprema ha establecido a través del Recurso de Nulidad 607-2022-Nacional, que el objeto de protección radica en la tranquilidad pública, entendida como el sentimiento de seguridad de la sociedad respecto de la vigencia de bienes jurídicos fundamentales para el normal funcionamiento de la vida social.

¹¹ En palabras de Perdomo & Parra (2021, pp. 20-25) este sistema disfuncional como organización desestabilizadora de la sociedad, lesiona por sí misma la seguridad pública como condición irrenunciable de las bases normativas estructurales de toda sociedad liberal que erige un contexto de pacificación para garantizar las condiciones necesarias sobre el ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales en sociedad.

¹² Contrariamente, Fletcher (2016, p. 19) nos enseña que el concepto de terrorismo tiene diferentes siluetas para diferentes propósitos, por lo cual se sugeriría que la mejor forma de pensar en concebirlo es como una especie de súper-delito, habida cuenta de que comprende una versión más grande y peligrosa del delito.

dentro del catálogo delictivo empresarial, el legislador peruano deberá reconocer a los elementos sustantivos que configuran el régimen de responsabilidad penal corporativa como un límite normativo sin el cual toda expansión resultaría un despropósito o imposible jurídico. En mejor decir, los criterios de selección deberán estar capitaneados por delitos susceptibles de ser cometidos ‘a nombre o por cuenta’ de la persona jurídica y pueda producir a su favor un ‘beneficio directo o indirecto’ (**¡elementos sustantivos!**).

Solo de esta manera evitaremos forzar el contenido interpretativo de ciertos tipos penales dentro del catálogo delictivo empresarial, sin esperar a que, producto de una técnica legislativa deficiente, los delitos de la Parte Especial deban ‘encajar’ en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas a como dé lugar. Nuevamente: ¡esta cuestión no se resuelve de manera simplista!

Para ilustrar estas premisas, tomemos los ejemplos mencionados anteriormente del sistema de referencia de autor, de modo que podamos evidenciar –teóricamente– la plausibilidad del delito de organización terrorista y colaboración con la actividad terrorista en el contexto de la actividad empresarial. Sin embargo, solo será propicia la imputación penal contra la persona jurídica por delitos de terrorismo cuando las personas físicas (artículo 3 de la Ley 30424), en cuestión, ostenten una cualidad especial (orgánica) o vinculación institucional con la corporación, de manera que pueda evidenciarse una conexión o vínculo de ilicitud (antijuridicidad) entre los incumplimientos normativos de prevención de la persona jurídica y el delito asociativo cometido por la persona física, esto es: ¡una vinculación de sentido!

De ahí que: (i) los socios, directores, administradores y representantes legales de la empresa; y (ii) las personas naturales sometidas a su autoridad y control actuarán en nombre de la sociedad cuando sus comportamientos sean acordes a las políticas y directivas de la corporación. Además, se comportarán por cuenta de la sociedad cuando se persiga los intereses del mismo ente, los cuales están determinados en el marco de las funciones sociales de cada miembro. Por ello, aun cuando se adopte una postura contraria a las políticas y directivas empresariales, no se dará esta tendencia de carácter alternativo cuando en el ejercicio de sus funciones sociales un miembro de la empresa persiga de forma predominante intereses personales al margen de las funciones sociales que se le ha conferido (Díez, 2012, p. 21).

De igual forma, es imprescindible destacar el criterio del beneficio directo e indirecto a efectos de

hacer propicia la imputación de la persona jurídica por delitos asociativos, fundamentalmente por dos razones a saber. La primera es que, en nuestro sistema de imputación, el elemento objetivo del beneficio contribuye a definir el ámbito de conductas motivables, posibilitadas y facilitadas por los incentivos propios de la organización, de modo que determina las potenciales conductas de la persona física con cierto grado de capacidad de incentivo para la organización, sobre las cuales la propia empresa debe asumir ‘excepcionalmente’ una competencia normativa. La segunda razón es que, la funcionalidad del elemento ‘beneficio’, actúa como un calificador del injusto que define las hipótesis que merecen pena, es decir, provee criterios de merecimiento de la pena legítimos y esenciales (García, 2020, pp. 841-842).

Mediante la locución legal del beneficio, se hace referencia a una cualidad del comportamiento típico, no al resultado material ni a un elemento subjetivo del injusto. Por lo tanto, la exigencia de actuar en beneficio directo o indirecto de la empresa tiene que ser comprendida en términos objetivos, circunscrita a la idoneidad del hecho cometido para reportar alguna ventaja de tipo económico (incremento de ingresos o ahorro de gastos), competitivo (mejora de posición en el mercado), estratégico (evitación de perjuicios) o reputacional para la entidad corporativa, independientemente de que a fin de cuentas se materialice o no tal ventaja.

Esta realidad normativa trae consigo una serie de problemas, especialmente para los delitos asociativos, pues, si se entiende que el beneficio no ha de ser estrictamente económico, sino que puede ceñirse a cualquier otro tipo de ventaja, entonces el alcance incriminador de la responsabilidad penal corporativa podría abarcar una extensión desconocida que franquee la posibilidad de utilizar el *ius puniendi* en contextos no habituales (Torres, 2020, p. 167).

Ante estos supuestos, no resulta errado partir por una acepción negativa sobre el criterio del beneficio, de modo que pueda negarse un beneficio a favor de la empresa cuando, a pesar de que el comportamiento de la persona natural sea el idóneo *ex ante* para generarlo, al final de cuentas, alcance a ocasionar costos económicos, organizativos o reputacionales en contra de la persona jurídica. Para los fines aquí expuestos, solo de esta manera se podrá establecer una verdadera relación entre el delito asociativo y la obtención de un beneficio; dicho de otro modo, por mucha colaboración que se cometa con una organización terrorista, si no existe beneficio, tampoco existirá responsabilidad contra la empresa.

III. LA PERSONA JURÍDICA COMO GARANTE INSTITUCIONAL FRENTE A INSTITUCIONES ASOCIALES

A. Fundamento de la responsabilidad de la institución corporativa por comisión de delitos

Si bien, las personas jurídicas no son perceptibles por los sentidos ni implican condición alguna de corporalidad, a comparación de las personas físicas de existencia visible, ello no condiciona a reco-

nocerlas como una mera ficción o simple artificio de fantasía, pues en realidad estas solo existen en el derecho y por el derecho. En otras palabras, las organizaciones empresariales son una realidad del mundo jurídico¹³, empero, no del mundo sensible¹⁴, toda vez que la ‘institución corporativa’ (Atehortúa, 2005, p. 49) sea clasificada en un grupo social intermedio entre el individuo y el Estado, al ser reconocida como sujeto de derecho¹⁵ con dimensiones dinámicas de naturaleza sociológica-existencial, axiológica y formal-normativa:

Figura 2: Recuadro dimensional de la persona jurídica como centro de imputación

Dimensión sociológica-existencial	Dimensión axiológica-valorativa	Dimensión formal-normativa
La persona jurídica está constituida materialmente por un substrato humano, los cuales reproducen sus efectos y contenidos normativos.	La persona jurídica funciona persiguiendo fines colectivos propios y autónomos.	La persona jurídica es un centro de imputación de situaciones jurídicas subjetivas al ser reconocida legalmente como una unidad formal.

Fuente: Elaboración propia a partir de Atehortúa (2005, p. 50).

Por lo tanto, al reconocer a las organizaciones empresariales cierta sustancialidad cualitativa, estas cumplen con sus condiciones de existencia, pues a partir de ahí podremos decir que las corporaciones actúan en la vida jurídica como sujetos autónomos¹⁶, siendo su existencia distinta e independiente a la de sus miembros individuales.

De este modo, es menester reconocer que el contexto socio-económico de nuestros días se desarrolla fundamentalmente a través de personas jurídicas con una incidencia creciente en la integración social general de los negocios lícitos y en la comisión de delitos por medio de sus miembros (Künsemüller, 2020, pp. 258-262) como si fueran cuevas oscuras sobre las cuales se abren grietas o destellan luces de ilegalidad.

Por ello, a propósito de la función preventiva del Derecho penal, este responde a una determinada orientación política-criminal contra la delincuencia que depende de la política general de nuestro modelo constitucional de Estado entendido como

principio valorativo supremo (Mir, 2011, pp. 15-20) que impone ‘fundamentos funcionales’ al *ius puniendi* con estricta sujeción de los límites de exclusiva protección de bienes jurídicos, legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, subsidiariedad, entre otros.

Sobre este postulado político-criminal se desprende que la transición de las personas jurídicas hacia su consideración como sujetos del Derecho penal, no obedece a razones de peligrosidad en comparación a su rol protagónico del pasado, sino que, en realidad, esto se debe a un profundo cambio de mentalidad sobre el discurso social o meta-relato respecto al papel institucional primordial que a las personas jurídicas les corresponde en el actual contexto social (Feijoo, 2016, pp. 20-22).

Desde esta concepción institucional, las personas jurídicas han de ser garantes de intereses de carácter público, como el cumplimiento de la legalidad o la adecuación de su funcionamiento conforme al Derecho. Dada su mayor complejidad, asumen una

¹³ En esa misma línea, Herrera, E., Barrera, K. & Rodríguez, I. (2023, p. 5) mencionan que cuando la exposición de motivos del Libro de Personas del Código Civil peruano se dedica a la existencia de la persona jurídica, no se refiere a una existencia empírica, sino a una existencia puramente legal o formal, describiéndola como el resultado de un proceso de reducción de personas individuales al punto de identificarla como una unidad colectiva o pluralidad organizada.

¹⁴ Críticamente, para Alfaro (2024), las personas jurídicas son una invención jurídica que forman parte del mundo de las cosas (de lo real), pero no del mundo de las personas (de lo social), en tanto y en cuanto sean un tipo específico de cosas, es decir patrimonios y su régimen jurídico forma parte del Derecho de Cosas y no del Derecho de la Persona. Igualmente, Palma (2013, p. 131) sostiene que la persona jurídica es una construcción absolutamente normativizada como una enteología sin base natural y que su capacidad de intervenir en el mundo es ajena a cualquier realidad ontológica susceptible de desplegar efectos penales.

¹⁵ De acuerdo con Serrano-Piedecabras (1997, p. 132), la persona jurídica constituye una realidad social con capacidad plena en razón a su verdadera existencia jurídica, por lo que como sujeto de imputación normativa es una destinataria de obligaciones generales de la sociedad y obligaciones particulares impuestas por vía judicial.

¹⁶ Artículo 78 del Código Civil.- La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de estos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio ni están obligados a satisfacer sus deudas.

obligación jurídica estricta de no producir riesgos –mayor a la de cualquier ciudadano– y, precisamente por la regulación del Estado, se delega sobre las empresas, a modo de garante institucional, el deber de previsión elemental respecto de los acometimientos o conductas delictivas de las personas físicas que la integran. Esto explica por qué se reconoce a las empresas como ‘garantes originarias’ (Lascuraín, 2017, p. 315) de los riesgos que supone su actividad productiva.

Solo con entender el papel institucional primordial de las empresas, es coherente reconocer que sobre aquellas no basta con ser ‘ciudadano’, sino que se les exige algo más¹⁷: ser un ‘buen ciudadano corporativo’. En este contexto, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se insertan en un nuevo modelo de Estado que, en lugar de realizar directamente prestaciones a los ciudadanos, se basa en un marco de colaboración público-privada con los nuevos protagonistas del tráfico jurídico: las empresas (Goena, 2021, p. 160).

Este nuevo modelo constituye un cambio de visión constitucional del Estado, transformándolo en un **Estado Garante o Estado Colaborativo** (Ruiz, 2017, p. 16), que responde eficazmente a las nuevas exigencias de la sociedad civil. En ese sentido, la prevención de la criminalidad exige consolidar una colaboración público-privada entre el Estado moderno y los particulares, haciendo fundamental involucrar activamente a las personas naturales y jurídicas a través de una auténtica delegación del deber institucional del Estado. Así, estos actores asumen el papel coprotagonista en la gestión de riesgos de posible incidencia penal. Esta estrategia institucional busca desfasar el clásico Derecho penal hacia el ciudadano (represivo) para dar paso a un Derecho penal con el ciudadano (preventivo y participativo). Solo de esta manera podremos construir un **post-Derecho penal** que encierra la finalidad de prevenir más que castigar.

En esa misma línea, desde nuestra pre-comprensión adoptada, las organizaciones empresariales son garantes institucionales en virtud a sus deberes de cooperación con el Estado, en específico, desde una posición de garantía concretada en deberes ‘cuasi-públicos’ o ‘cuasi-policiales’ para prevenir delitos a nivel *ad intra* y *ad extra* de la organización y estructura empresarial. Desde un enfoque normativo, los deberes en cuestión no se tratan de una transferencia total o completa

del Estado a la organización en la que se pretenda que que aquella debe asumir solidariamente ‘deberes de policía’ que abarquen la prevención y evitación de todos los delitos desarrollados en su seno. Más bien, estos deberes solo se reducen a asumir una autorregulación y el control de los ‘propios riesgos’ generadores de incentivos para conductas delictivas de terceros vinculados orgánica o funcionalmente con la organización (García, 2020, p. 835).

A partir de lo señalado, corresponde sostener que, aunque la responsabilidad de las corporaciones por la comisión de delitos se trata de un cuerpo extraño al Derecho penal tradicional que protege las libertades individuales, esta no puede ser comprendida como una supraestructura al margen de nuestra Constitución. Así, a pesar de todas las dificultades de encaje e interpretación, el modelo de responsabilidad de las empresas debe estar sometido a las reglas constitucionales y solo desde las mismas es posible entenderlo (González, 2020, p. 76).

Por esta razón, la propuesta aquí asumida pretende construir una responsabilidad penal de la persona jurídica que no desnaturalice los principios que deben inspirar cualquier solución punitiva, en atención a las exigencias constitucionales de responsabilidad por el hecho propio derivado de la realización de un acto relevante, ilícito y personalmente reprochable en la medida que sea exigible su evitación (Carbonell, 2020, p. 533).

Por ello, para una legitimación racional del sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, debe empezarse por adoptar un anclaje normológico sobre la imputación penal de empresas. Esto se debe a que, ante la aparente disyuntiva entre normas de determinación y normas de valoración –construcciones dogmáticas-operativas de directivas de conducta expresados en mandatos y prohibiciones, y las segundas como expectativas de comportamiento estabilizadas contrafacticamente o conductas institucionalizadas (deber ser impersonal)– lo cierto es que toda conducta contraria a las normas supone, en términos materiales, la infracción de la libertad.

Desde un plano estructural convergen ambas perspectivas, pues, si la norma para algunos ciudadanos es fuente de orientación contrafáctica (fuente de derechos), ello se debe a que para otros

¹⁷ En el mismo sentido, Cuello (2013, p. 18) sostiene que la empresa, como prototipo de persona jurídica, representa en la vida social, sobre todo en el tráfico mercantil y económico, la manifestación más clara de agente social al que se le asigna un mayor ámbito de actuación para que el sistema funcione, de modo que el papel que juega la empresa en el ámbito económico es mucho mayor que el de la persona física.

es una directiva de conducta (fuente de deberes). Es así como el delito determina horizontalmente la lesión de una relación jurídica y verticalmente, la infracción de una norma de comportamiento (Vacchelli, 2020, pp. 117-118).

No obstante, un análisis normológico determinante sobre el sistema de imputación de la persona jurídica contrae cuestiones no menores a superar, entre ellas, reconocer una identidad formal y material de la corporación (Palomino, 2023, p. 171), y, con ello, su libertad jurídica garantizada, en tanto sea destinataria de las normas jurídico-penales, además de comprobar su capacidad de autodeterminación para ser merecedora de un reproche de carácter penal.

En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que, así como la racionalización para atribuir una consecuencia jurídico-penal a la persona física gravita en su libertad de autodeterminación como centro de imputación, desde un entendimiento moderno de libertad en Derecho penal, también para el caso de los actores corporativos corresponde referirnos a su naturaleza adscriptiva conforme a criterios normativos de imputación sobre la base de unos indicios de autorreferencialidad (Gómez-Jara, 2022, p. 61).

Así, el sistema de imputación para la persona jurídica se configura a partir de su libertad de autodeterminación con base en indicios de una autoorganización¹⁸ suficientemente desarrollada y compleja, de modo que su responsabilidad no pueda ser adscrita objetivamente a uno o varios individuos inequívocamente (difuminación de responsabilidad individual).

Por ende, desde una concepción institucional como la nuestra, es irrelevante la falta de un **'equipamiento psicológico'** (Neumann, 2023, p. 358) imponible a las empresas para soportar imputaciones jurídico-penales, en tanto que lo verdaderamente trascendental sea su disposición a cumplir con la legalidad al reconocerle una **identidad institucional** propia (Feijoo, 2016, p. 19-20), pues la realidad social de las corporaciones excede de lo meramente colectivo como conjunto de decisiones individuales.

En consecuencia, el núcleo correcto sobre la identidad de las organizaciones empresariales es el resultado de una cultura empresarial o una compleja red de relaciones interpersonales a lo largo

del tiempo en un contexto institucional. Por ello, la responsabilidad individual no agota la explicación normativa del fallo organizativo-estructural de la empresa, lo que lleva a recurrir a una pena complementaria (no accesorio) impuesta contra la persona jurídica para estabilizar la vigencia de la norma penal mencionada.

Por lo tanto, las corporaciones tienen la capacidad de dotarse a sí mismas de normas jurídico-penales que las imperen, a partir de una autonomía operativa como propiedad emergente de su suficiente complejidad interna para ser imputable. En consecuencia, se constituyen como un ente capaz de participar en la generación de comunicaciones sociales por sí misma como para adoptar una 'forma de ser' inversa al incumplimiento de la norma y cuestionar su vigencia (Piña, 2023, pp. 13-15).

Definitivamente, a efectos de una correcta aprehensión sobre el concepto de 'libertad' como núcleo fundamental de atribución del sistema jurídico que permite valorar al juzgador la existencia de un merecimiento y necesidad de pena contra la persona jurídica; estamos de acuerdo con Gómez-Jara al señalar que el Derecho penal goza de una suficiente autonomía para adscribir capacidad de cuestionamiento de la norma a las personas jurídicas, pues si la responsabilidad penal es de naturaleza adscriptiva conforme a criterios estrictamente normativos de imputación, entonces no tiene sentido una mayor exigencia de autorreferencialidad para las personas jurídicas cuando la propia autorreferencialidad de la *psique* humana es seriamente cuestionada por las ciencias cognitivas (2018, pp. 198-199). Entonces, si el Derecho penal adscribe libertad de autodeterminación, lo hace tanto para personas físicas como jurídicas al tener ambas un determinado nivel de complejidad interna.

En ese sentido, los criterios rectores que inspiran el sistema de imputación deben ser flexibilizados conforme a un progresivo criterio de normativización penal; es decir, debe abandonarse todo anclaje de conceptos ontológicos, prejurídicos, voluntaristas o psicologizados, y el entendimiento tradicional de pena, ya que, desde una concepción normativa, el centro de atención debe ser la infracción del deber —aspecto normativo del deber ser— de las personas jurídicas como sistema organizacional autorreferencial que puede comunicar una expresión de sentido de infidelidad a la norma jurídico-penal (Polaino & Polaino-Orts, 2019, pp. 104-107).

¹⁸ En contra, Aguilera (2023, pp. 14-28) sostiene que los postulados sistémicos no observan criterios claramente definidos y científicamente respaldados, por lo que deberá partirse por un modelo antrópico de hetero-culpabilidad que concibe a la persona jurídica como un contexto o agente de influencias.

Ahora bien, sobre el fundamento de responsabilidad penal de la institución corporativa por comisión de delitos nos cuestionamos: ¿Por qué una revisión normativa sobre rol institucional de la persona jurídica y no otros fundamentos?, ¿deberes jurídico-penales o incumbencias?, ¿cuál es su límite? Ante irresolubles interrogantes, el planteamiento de Feijoo contribuye a encontrar una respuesta inicial:

[...] entre posturas más sistémicas o sociales que entienden que el agente es la organización de la que es titular la persona jurídica o bien de corte más individualista que entienden que el sujeto de imputación es un “colectivo de personas físicas”, ambas perspectivas incurren en dos errores. En primer lugar, no tienen en cuenta la dimensión institucional de la persona jurídica, que es la que se vincula a las expectativas de cumplimiento de legalidad [...] en segundo lugar, que la teoría del delito tradicional está construida sobre el concepto de acción culpable por las características del sujeto de imputación. La persona jurídica exige una referencia de carácter más estructural. (2006)

Fundamentalmente, a efectos de ensayar una respuesta sobre la cuestión, resulta esencial rebatir las críticas orientadas a señalar que el ordenamiento jurídico-penal peruano, en la Ley 30424, no ha establecido taxativamente ningún ‘deber’ de la persona jurídica que consista en implementar programas de cumplimiento, dado que esta facultad podría entenderse como una situación cualitativamente inferior a modo de incumbencia (Hruschka, 2009, p. 81), pero de ningún modo como un deber de organizarse correctamente, pues solo se impone deberes (individuales) sean de vigilancia, control y supervisión, a los miembros de la organización empresarial (Alpaca, 2022, p. 83).

Al respecto, partiendo de las comprensiones adoptadas y comprobando su capacidad de rendimiento, la responsabilidad penal de las empresas, desde su dimensión institucional, implica otorgar a las corporaciones una identidad propia que genera en ellas expectativas jurídicas *ad intra* y *ad extra*. Esto significa que, si bien nuestro ordenamiento jurídico no establece expresamente un deber de

desarrollar políticas de cumplimiento de la legalidad (deberes de organización y gestión de cumplimiento normativo), se tiene por correlato¹⁹ que la inexistencia de un programa eficaz de cumplimiento con necesaria vinculación a un hecho delictivo implica una responsabilidad penal²⁰, en tanto que el cumplimiento de la legalidad sea el cometido institucional de las empresas en virtud a la función delegada del Estado, traducido en la prevención de determinados delitos a través de sus comunicaciones masivas con personas físicas *intra* y *extra*, así como otras personas jurídicas (Bardavío, 2022, pp. 19-21).

Sin embargo, recordemos que los deberes positivos abarcan siempre el deber negativo de no perturbar la organización ajena (Jakobs, 2004, p. 168). Por lo que corresponde reconocer una responsabilidad penal institucional de las corporaciones como colaboradoras cuasi-policiales del Estado para fomentar la cohesión de las diversas instituciones sociales de nuestra comunidad. Además que, por el simple hecho de ser un ciudadano corporativo, ello se condensa con la institución básica *neminem non laedere*, en tanto constituye la condición mínima de todo estado de juridicidad para hacer responsables a las corporaciones por quebrantar sus máximas de organización empresarial (Hernández, 2010, p. 219). Ello rezaría como la obligación originaria de no generar en el propio ámbito de autoorganización empresarial *outputs* que lesionen a los demás en el marco de los procesos comunicativos empresariales (Gómez-Jara, 2005, p. 240).

De acuerdo con Kubiciel, la ciencia jurídico-penal se basa en un sistema diferenciado de deberes al interpretar el derecho vigente y examinarlo críticamente (2021, p. 246), dado que los tipos penales de la Parte Especial constituyen reglas bastas para distribuir competencias que sirven de recurso interpretativo para hacer responsable penalmente a las empresas por delitos de infracción al deber general negativo, como en el caso del delito de lavado de activos (Carlos de Oliveira, 2020, pp. 260-266) y delitos de terrorismo, así también con los delitos de infracción al deber especial positivo, sean delitos de corrupción pública, delitos tributarios, etc.

¹⁹ En la misma línea, Baldomino (2022, p. 75) señala que, si bien es cierto que la ley no obliga a las corporaciones a adoptar un programa de cumplimiento, lo que es correcto; el hecho de no hacerlo implica una decisión de la persona jurídica, y de su plana directiva, asumiendo los riesgos y costos que dicha decisión significa.

²⁰ En palabras de Martínez-Buján (2023, p. 42), el auténtico presupuesto (fundamento o sustrato) de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es coherente con la función primordial que debe atribuirse a los programas de cumplimiento, a saber, una función de colaboración con el Estado en la tarea de prevenir delitos (función estatal de policía preventiva), que entraña un mandato de lograr un resultado (y no una simple prestación de medios). Igualmente, según Ruíz (2020, p. 6), aunque no se exprese de forma explícita que el verdadero fundamento de la responsabilidad penal corporativa sea el descontrol, la exigencia de implementar un programa de prevención empresarial se traduce de forma implícita como el verdadero fundamento de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

De este modo, así como una persona individual puede revelar su libertad de forma defectuosa al menoscabar un interés tutelado penalmente, lo mismo sucede con las corporaciones, en tanto que, como garantes institucionales, cargan con deberes cuasi-policiales de colaboración con las labores preventivas del Estado que se ven quebrantados cuando rebasan los estándares del segmento social donde se ejerce la libertad de empresa conforme a la naturaleza y características de la multiforme configuración de los modelos de prevención de la organización empresarial (Caro & Reaño, 2022, pp. 16-19). Dicho de otra manera, cuando la identidad cultural de la empresa se engrana a una ‘competencia por estructuración’, a partir de la cual se comunica el significado de una antinormatividad a modo de fallos o ‘incendios’ estructurales (injusto), traducidos en la reducción de los programas de prevención, control y vigilancia capaces de poner en entredicho la norma penal y, en consecuencia, revestir un merecimiento de pena por su insuficiente cultura de cumplimiento de la legalidad (culpabilidad) (Feijoo, 2021, p. 47).

En relación con lo anterior, y con las exigencias constitucionales del modelo de Estado sobre el cual partimos, la propuesta aquí adoptada se identifica con un modelo estricto de responsabilidad por el hecho, de modo que las empresas serán corresponsables de la comisión de delitos de los miembros que la integran (presupuesto formal), siempre y cuando estén vinculados a su defecto organizativo-estructural (fundamento), y, como consecuencia de ello, se le reproche penalmente el clima ético de una cultura o disposición corporativa de cumplimiento de la legalidad (cometido institucional) insuficiente.

En definitiva, si bien el delito cometido por una persona física como hecho de conexión materializa el fundamento de responsabilidad penal de la persona jurídica, esta última responde por su propio injusto y culpabilidad al infringir su deber correlativo de organizarse adecuadamente para evitar la comisión de delitos al interior de su seno durante el desarrollo de la actividad social. Esto significa que es corresponsable a título de ‘colaborador facilitador’ del delito en cuestión, en tanto el ilícito penal sea el resultado o concreción del riesgo creado por la corporación a través de su déficit estructural (Baldomino, 2022, pp. 74-78).

Por lo tanto, desde un enfoque normológico, es acertado sostener que, para la configuración del injusto de la persona jurídica, la conducta delictiva inicia con el defecto organizativo-estructural a modo de una intervención ilícita de tentativa acabada pre-ejecutiva no típica²¹ (infracción personal imperfecta no punible de la norma de conducta). Esto ocurre mucho antes del acometimiento delictivo de la persona física (interviniente ejecutor), en tanto el comportamiento delictivo individual implique una ‘cosedura o prosecución’ del defecto organizativo, traducido en la concreción de un determinado tipo penal de la Parte Especial como sentido final del hecho global de intervinientes. De esta manera, el injusto individual se convierte en la actualización típica del injusto estructural que concluye con una imputación recíproca a nivel de la norma primaria y, en segundo nivel, implica ya un injusto punible (norma de sanción).

B. La institución corporativa frente a instituciones asociales (crimen organizado corporativo)

A partir de las premisas expuestas, se podrá evidenciar las consecuencias de adoptar una concepción institucional de la responsabilidad penal corporativa desde una perspectiva unitaria e interna como unidad económica, mostrándose el modelo mixto de imputación como el más apropiado dentro de nuestro sistema constitucional de libertades, de modo que interesará analizar más a fondo la confluencia sistémica entre la criminalidad empresarial en términos institucionales con el delito asociativo.

En los tipos penales asociativos, se está frente a un problema irresoluble, pues las empresas nunca podrán responder como miembros de una organización criminal (terrorista); por cuanto ello significaría atribuirle una condición de permanencia asocial institucionalizada a la actividad delictiva, transformándola en una persona jurídica inimputable, en tanto estado de cosas antijurídicas. Por lo tanto, no sería admisible que se pueda imputar a una organización empresarial este injusto de sistema asocialmente constituido por las limitaciones normativas del sistema de imputación de personas jurídicas en el contexto de nuestro Estado constitucional de Derecho (Oporto, 2018, pp. 49-51).

Como es de notar, a lo sumo, la comunicación defectuosa de la persona jurídica se puede reducir a

²¹ Por todos, Vacchelli (2020, p. 156) postula que la lesividad del injusto de la participación antes de la ejecución radica en el peligro de generar condiciones para la realización del tipo y en el menoscabo de la plena disposición del derecho subjetivo de la víctima; mientras que, si se trata de intervenciones concomitantes, el injusto material de la participación consiste en el más grave desprecio típico de la relación jurídica entre el colectivo y la víctima. En la intervención previa al tipo, existe un significativo abierto que requiere insertarse en una red estructurada de significado, mientras que en los casos de intervención concomitante el partícipe se postula en un contexto delictivo actual y su actividad deviene típica.

la de un agente periférico-externo que colabora a la permanencia, fortalecimiento e institucionalización de las organizaciones terroristas; por lo cual, se tornaría político-criminal y dogmáticamente viable hacer responsable a las personas jurídicas por actos de cooperación en favor de las organizaciones terroristas.

Ahora bien, queda pendiente la cuestión problemática sobre la regulación de los grupos empresariales o unión de empresas en el contorno del crimen organizado (terrorista). Esta cuestión dista rotundamente de ser pacífica. Por un lado, se sostiene que los grupos de empresas no pueden ser sujetos responsables penalmente por carecer de personalidad jurídica, además de no estar previsto en nuestro ordenamiento jurídico ningún deber específico de las matrices respecto a sus filiales. Por otro lado, se parte de la independencia jurídica de los entes con personificación jurídica para reconocerles deberes de control específicos de su actuar precedente (injerencia) o contrato (societario) en casos de responsabilidad de la sociedad dominante por delitos cometidos por sus directivos que influyen en filiales o por hechos cometidos por dependientes de las filiales (García, 2019, pp. 284-290).

Desde este discurso político-criminal, se alza eco sobre la necesidad de configurar una normativa que contenga preceptos sobre el ámbito corporativo externo de las sociedades reunidas en forma de agrupación que se arrogan tipologías de mercado para la comisión de delitos o encubrimiento de prácticas deshonestas para evitar su impunidad en el plano de la criminalidad asociativa.

Es precisa una legislación penal que comprenda las nuevas realidades sociales extendidas a la organización delictiva sobre las cuales se debería constituir un injusto-estructural para estar en condiciones de imputar penalmente los delitos asociativos a las estructuras empresariales que participan del crimen organizado terrorista, tal como lo pueden hacer los gremios empresariales, asociaciones corporativas o grupos de empresas que convierten en disfuncionales los cánones de atribución actualmente contemplados en nuestra ley penal. Por lo tanto será indispensable proponer cambios en los cánones asociados sobre las corporaciones como sujetos de derecho, en tanto

estos entes colectivos puedan ser colaboradores de organizaciones criminales con fines terroristas (Carranza, 2016, pp. 4-6).

En este contexto, la existencia de grupos y conglomerados empresariales como forma de organización se perfila, desde una perspectiva extrínseca, para fomentar cooperaciones delictivas 'interempresariales' con la finalidad de habilitar estos comportamientos desviados a través del unísono de una comunicación lesiva en el establecimiento de rutinas o cultura injusta del conglomerado (Carranza, 2017, pp. 291-293), fungiendo de amplificadores o plus de los espectros del programa delictivo de las organizaciones terroristas para facilitar la materialización de los delitos de terrorismo o impunidad de los actores de las obras criminales.

En esta relación delictiva-colectiva se presentan vínculos débiles que canalizan un canal adecuado para la actuación de empresas como figuras periféricas, las cuales pueden cooperar de manera coordinada con las organizaciones terroristas para el procesamiento de droga, transporte, comercialización, robo de autopartes, reclutamiento de mujeres para el tráfico sexual, entre otras. Así, se consolida la participación de las empresas en delitos asociativos como grupo de actuación accesorio en los distintos segmentos que integra el injusto sistémico de las organizaciones terroristas, basándose en relaciones de asistencialismo con un grado de cohesión reducido y esporádico.

En atención a lo expuesto, podemos concluir con esta investigación que, para combatir de manera eficaz y eficiente la consolidación del crimen organizado corporativo como relación colectivo-delictiva, el Estado garante o colaborativo debe enfocar el tratamiento del 'post-Derecho penal' en las estrategias de lucha (preventiva) dirigidas a detectar, prevenir, evitar y erradicar las comunicaciones defectuosas de las corporaciones que adopten una postura de contubernio y connivencia con las organizaciones criminales con fines terroristas. Solo al identificar esta comunicación lesiva se podrá impedir la producción de información relevante que desmitifica o encausa la materialización de delitos asociativos y la expansión del perímetro criminal a nivel corporativo. En el caso peruano, si los programas de cumplimiento²² especialmente diseñados

²² Siguiendo a Leo-Castela & Sánchez (2020, p. 643), la disuasión óptima de la criminalidad empresarial se encuentra en establecer un punto medio en términos de costo-beneficio, otorgando a las corporaciones ciertos estímulos para el cumplimiento normativo de prevención de delitos que superen los beneficios aparejados con su incumplimiento traducido en la comisión de delitos, de manera que en realidad el *compliance* penal podría abordar este problema aplicando una combinación entre el derecho imperativo y mecanismos de autorregulación para graduar la intensidad de las sanciones de acuerdo a los esfuerzos organizativos de ser fiel al cumplimiento de la norma.

para este tipo de criminalidad²³ no demuestran estar a la altura del combate-preventivo, entonces se deberá emprender una nueva búsqueda estratégica con otras reglas del juego.

IV. CONCLUSIONES

La Ley 31740 modificó el objeto de la Ley 30424, incrementado notoriamente la cantidad de tipos penales de la Parte Especial comprendidos en su catálogo delictivo empresarial. Esto plantea el problema de un evidente despropósito sobre la consolidación de una orientación político-criminal que sea uniforme y coherente para combatir los ámbitos de criminalidad más sensibles en nuestra sociedad. El presente estudio se enfocó en analizar la plausibilidad de postular un sistema de referencia con tres coordenadas (autor-hecho-víctima) a efectos de ofrecer una determinada orientación político-criminal que establezca de manera restrictiva los criterios de selección de delitos conforme a los principios fundamentales del Derecho penal. Concluimos que este sistema político-criminal restrictivo tiene la capacidad suficiente para legitimar la intervención del *ius puniendi* en los ámbitos más sensibles de la criminalidad empresarial y para fundamentar la necesidad del reproche estatal contra las empresas por conductas contrarias a las normas que lesionan libertades jurídicamente garantizadas.

Como ejemplo práctico para la aplicación teórico-práctica de estos parámetros restrictivos, se seleccionó el caso paradigmático del crimen organizado corporativo, es decir, la interrelación y contubernio entre organizaciones empresariales y organizaciones criminales (terroristas). Este ámbito se identifica como sensible para canalizar potenciales contribuciones dirigidas a materializar programas delictivos contra la seguridad pública. A pesar de que, en nuestra sociedad, no sea frecuente encontrar esta relación delictiva-colectiva, lo cierto es que estos supuestos sí cumplen con la mayoría de las coordenadas del sistema de referencia propuesto. Así, su selección dependerá de un análisis complementario sobre los principios fundamentales de nuestro Derecho Penal. De todos modos, con esta hipótesis se destaca la valiosa necesidad de hacer énfasis en las comunicaciones defectuosas del perímetro criminal corporativo para emprender una real estrategia de lucha (preventiva) eficaz y eficiente contra la criminalidad empresarial. 🏢

REFERENCIAS

- Alfaro, J. (25 de junio de 2024). Personalidad jurídica y pena. *Almacén de derecho*. <https://almacenederecho.org/personalidad-juridica-y-pena>
- Aguilera, R. (2023). Déficits del enfoque sistémico de responsabilidad penal de la persona jurídica: inimputabilidad y contagio penal en operaciones de M&A. Procedencia del modelo antrópico y behavioral game theory. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, (25), 1-54. <http://criminnet.ugr.es/recpc>
- Alpaca, A. (2022). Apuntes sobre la responsabilidad (objetiva y por el hecho de otro) de la persona jurídica por los delitos cometidos por personas naturales integradas en su estructura: El caso peruano. *Nuevo Foro Penal*, 18(99), 53-101. <https://doi.org/10.17230/nfp18.99.3>
- Atehortúa, J. (2005). Dimensión institucional de la persona jurídica en el derecho colombiano. La sociedad y la empresa como institución. *Revista de Derecho Privado*, (8), 47-91. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=417537585004>
- Baldomino, R. (2022). *Bases de la responsabilidad penal de las personas jurídicas*. Tirant lo Blanch.
- Bardavío, C. (2022). Imputación e injusto de la responsabilidad penal de la persona jurídica: lineamientos de un modelo de 'autor detrás del autor'. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, (24), 1-48. <http://criminnet.ugr.es/recpc/24/recpc24-16.pdf>
- Bedecarratz, F. (2020). Defecto de organización y reglas de comportamiento en la imputación de las personas jurídicas. *Política Criminal*, 15 (30), 694-728. <http://politicrim.com/wp-content/uploads/2020/12/Vol15N30A7.pdf>
- Bocanegra, J. (2020). *Los delitos de organización y grupo criminal: Cuestiones dogmáticas y de política criminal*. Bosch Editor.
- Carbonell, J. (2020). La persona jurídica como sujeto activo del delito. En De J. Vicente, et al. (Coords.), *Libro homenaje al profesor Diego-*

²³ Es sumamente importante lo señalado por Bedecarratz (2020, pp. 721-722), quien postula que existen tipos de delitos de carácter general o común que no están flanqueados por alguna normativa regulatoria complementaria y sectorial que determinen el contenido de los deberes específicos de la organización empresarial, como es el caso de los programas de cumplimiento normativo orientados a prevenir la criminalidad asociativa, por lo que para estos supuestos se deberá encontrar en los principios del buen gobierno corporativo un carácter vinculante para establecer verdaderas normas de comportamiento extrapenal.

Manuel Luzón Peña con motivo de su 70° aniversario (Vol. 1, pp. 523-536). Reus.

Carlos de Oliveira, A. (2020). *Los deberes de colaboración en el Blanqueo de Capitales. Contexto normativo, fundamentos y límites* [Tesis de doctorado]. Universitat Pompeu Fabra. <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/671512/tacco.pd-f?sequence=1&isAllowed=y>.

Caro, J. & Reaño, J. (2022). Responsabilidad penal de la empresa y criminal compliance. Aspectos sustantivos y procesales. *Forseti: Revista de Derecho*, 11(15), 9-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.21678/forseti.v11i15.1753>.

Carranza, L. (2016). *Correlación entre el crimen organizado empresarial y corrupción*. Proyecto Justicia.

(2017). *Crimen organizado corporativo* [Tesis de doctorado]. Universitat de Barcelona. https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/121348/1/LCF_TESIS.pdf

(2020). Políticas corporativas de prevención criminal. Factores, bases y fundamentos. *Revista Criminalia-Nueva Época*, 1(87), 763- 782. <https://www.criminalia.com.mx/index.php/nueva-epoca/article/view/115/129>

(2024) Hacia un injusto penal propio en los delitos estructurales-organizados. *Revista Criminalia- Nueva Época*, 1(90), 439- 455.

Castañeda, M. (2009). *El delito de terrorismo y garantías procesales en la lucha antiterrorista: Análisis de su evolución en la jurisprudencia*. Grigley.

Cuello, J. (2013). El significado de la acción (u omisión) de la persona física para la responsabilidad penal de la persona jurídica. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, (15), 1-25.

Dannecker, G. (2023). Sobre la necesidad de introducir sanciones jurídico-criminales contra colectivos. Reflexiones sobre los requisitos y la configuración de un Derecho penal de colectivo. En Saliger, F., Ruiz, C., Pastor, N. & I. Coca, I. (Eds.), *La responsabilidad penal de personas jurídicas: Fundamentos filosóficos* (Vol. 1, pp. 137-180). Colección Externado-Tirant Derecho.

Díez, J. (2012). La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Regulación española. In-

dret: *Revista para el Análisis del Derecho*, (1). <https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/260787/347969>

Feijoo, B. (2016). *El delito corporativo en el Código Penal español. Cumplimiento normativo y fundamento de la responsabilidad penal de las empresas*. Thomson Reuters.

(2021). Fortalezas, debilidades y perspectivas de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles. En Valdez, F. (Dir.), *Compliance penal: La responsabilidad “administrativa” de la persona jurídica y la atribución de responsabilidad penal a sus directivos* (pp. 135-176). Gaceta Jurídica.

(2023). La función de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. *Revista Electrónica de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance*, (1), 1-121. <https://www.redepec.com/la-funcion-de-la-res-ponsabilidad-penal-de-las-personas-juri-dicas-en-el-derecho-penal-espanol/>

Fletcher, G. (2016). *El indefinible concepto de terrorismo*. Universidad Externado de Colombia.

García, R. (2019). Responsabilidad penal y compliance en los grupos de empresas. En J. L. Gómez (Dir.), *Tratado sobre compliance: Responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión* (pp. 277-298). Tirant lo Blanch.

García, G. (2020). Relevancia del elemento interés o provecho en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. *Revista Chilena de Derecho*, 47(3), 821-848. <http://dx.doi.org/10.7764/r.473.10>

Goena, B. (2021). El nuevo ciudadano «corporativo». En P. Sánchez-Ostiz (Dir.), *Medio siglo de Derecho Penal en España: Del modelo autoritario al del ciudadano constitucional* (151-162). Comares.

Gómez-Jara, C. (2005). *La culpabilidad penal de la empresa*. Marcial Pons.

(2018). Sobre el fundamento (último) de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: a propósito de la posición de José Manuel Maza Martín y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En Ministerio de Justicia & Fiscalía General del Estado (Eds.), *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Homenaje al Ex. Sr. D. José Manuel Maza Martín* (pp. 181-199). Fiscalía General del Estado.

- (2022). Actor corporativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas. En M. (Coord.), *La responsabilidad penal de las personas jurídicas* (2da ed.). Tirant lo Blanch.
- González, J. (2020). *Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento*. Tirant lo Blanch.
- Hernández, H. (2010). La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. *Política Criminal*, 5(9). http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf
- Herrera, E., Barrera, K. & Rodríguez, I. (2023). Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Perú: una reevaluación del aforismo *societas delinquere nec punire potest* a partir de una perspectiva anticonceptualista. *Revista Direito GV*, (19), 1-25.
- Hinojosa, S. (2023) *¿Realmente la Ley 30424 establece una responsabilidad de naturaleza administrativa para la persona jurídica?* [Tesis de licenciatura]. Pontificia Universidad Católica del Perú. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/26695/HINOJOSA_JURADO_SOFIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hruschka, J. (2009). *Imputación y Derecho penal. Estudios sobre la teoría de la imputación*. B de F.
- Isensee, J. (2014). *El derecho constitucional a la seguridad: Sobre los deberes de protección del Estado constitucional liberal*. Rubinzal-Culzoni Editores.
- Jakobs, G. (2004). *Dogmática de Derecho Penal y la configuración normativa de la sociedad*. Thomson Civitas.
- Kudlich, H. (2013). ¿Compliance mediante punibilidad de asociaciones? En Urquiza, J. (dir.), *Revista Peruana de Ciencias Penales*, (26).
- Kubiciel, M. (2021). *La ciencia de la parte especial del derecho penal*. Editores del Sur.
- Künsemüller, C. (2020). Societas delinquere non potest: Actualidad y futuro en la doctrina y legislación chilenas. En De Vicente, J., et al. (Dir.), *Libro homenaje al profesor Diego-Manuel Luzón Peña con motivo de su 70° Aniversario* (Vol. 1, pp. 257-267). Reus.
- Lampe, E. (2003). *La dogmática jurídico-penal entre la ontología social y el funcionalismo*. Grijley.
- Lascuráin, J. (2017). *Pena, principios y empresa. Estudios sobre los principios penales y sobre los delitos de empresa*. A&C Ediciones.
- (2019). ¿Penamos a la persona jurídica por conductas de participación? *Almacén de derecho*. <https://almacendederecho.org/penamos-a-la-persona-juridica-por-conductas-de-participacion>.
- León, J. (2022). Personas jurídicas «imputables» e «inimputables» en el régimen de responsabilidad penal de los arts. 31 bis y ss. CP: una breve divagación a raíz de la errática jurisprudencia del Tribunal Supremo. *Diario La Ley*.
- Llobet, M. (2011). *Terrorismo y “guerra” contra el terror: límites de su punición en un Estado democrático* [Tesis de doctorado]. Universitat Pompeu Fabra. Repositorio institucional. <https://repositori.upf.edu/handle/10230/12168?locale-attribute=esv>.
- (2020). Miembros y colaboradores de organizaciones criminales –en especial, terroristas–: ¿Quién es qué y quién no es? *Indret-Revista para el Análisis del Derecho*, 4, 172-225. <https://indret.com/wp-content/uploads/2020/10/1583.pdf>
- Martínez-Buján, C. (2023). La estructura de la infracción penal de la persona jurídica: el presupuesto (el déficit organizativo peligroso) y el resultado/condición objetiva de punibilidad (el hecho de conexión posterior). *Revista Electrónica de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance*, (3). <https://www.redepec.com/la-estructura-de-la-infraccion-penal-de-la-persona-juridica-el-presupuesto-el-deficit-organizativo-peligroso-y-el-resultado-condicion-objetiva-de-punibilidad-el-hecho-de-conexion-posterior/>
- Maza, J. (2023). La colaboración con el delito de terrorismo en el Perú. *Lucerna Iuris Et Investigatio*, (5), 169-178.
- Mendoza, F. (2008). Delito de colaboración terrorista e imputación objetiva. El acto médico como conducta neutral: Análisis del precedente vinculante – R.N. N.º 1062-04. *Cuestiones actuales del sistema penal. Crisis y desafíos. Ponencias estudiantiles*. ARA Editores.
- Mir, S. (2011). *Bases constitucionales del Derecho Penal*. Iustel.
- Neira, A. (2021). La responsabilidad penal de las personas jurídicas como instrumento de lucha

- contra la criminalidad organizada. En F. Garrido (Dir.), *Retos en la lucha contra la delincuencia organizada* (pp. 167-184). Arazandi.
- Neumann, U. (2023). Sobre la (in)compatibilidad del Derecho Penal de las personas jurídicas con principios fundamentales del Derecho Penal individual tradicional. En Saliger, F., Ruiz, C., Pastor, N. & Coca, I. (Eds.), *La responsabilidad penal de personas jurídicas: Fundamentos filosóficos* (Vol. 1). Colección Externado - Tirant Derecho.
- Ontiveros, M. (2020). Delincuencia organizada corporativa: Su prevención mediante el criminal compliance. En N. Matellanes (Coord.), *Terrorismo, delincuencia organizada y justicia transicional: reflexiones y propuestas penales desde la Universidad de Salamanca* (pp. 173-193). Ediciones Universidad de Salamanca.
- Oporto, J. (2018). *La viabilidad de aplicar el injusto de sistema de los delitos de organización a la criminalidad empresarial* [Tesis de maestría]. Pontificia Universidad Católica del Perú. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/15690>
- Palma, J. (2013). Una propuesta de interpretación restrictiva en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En V. De Carvalho (Ed.), *El derecho y sus razones: Aportaciones de jóvenes investigadores* (pp. 125-138). Bubok Publishing S.L.
- Palomino, D. (2023). Principios, fundamentos y límites de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: una revisión normativista sobre su rol institucional a propósito de la Ley 31740. *Advocatus*, (40), 145-185. <https://doi.org/10.18041/0124-0102/a.40.10051>
- Paucar, M. (2016). *El delito de organización criminal*. Ideas Solución.
- Perdomo, J. & Parra, W. (2021). *Las organizaciones criminales: Sistemas de injusto autónomo*. Universidad Externado de Colombia.
- Piña, J. (2023). Autonomía, complejidad y cultura corporativa: el corsé cognitivo de la dogmática para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. *Revista Electrónica de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance*, (3), 1-23. <https://www.redepec.com/autonomia-complejidad-y-cultura-corporativa-el-corse-cognitivo-de-la-dogmatica-para-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/>.
- Polaino, M. & Polaino-Orts, M. (2019). La persona jurídica como centro de imputación. Un apunte sobre la regulación en España. En Ontiveros, M. & M. Polaino-Orts (Coords.), *Persona jurídica: Responsabilidad penal de las empresas y criminal compliance* (pp. 101-156). Editorial Flores.
- Polaino-Orts, M. (2009). Delitos de organización como derecho penal del enemigo. Jakobs, G. & Polaino-Orts, M., *Delitos de organización: un desafío al Estado*. Grijley.
- (2013). Criminalidad organizada: fundamentos dogmáticos y límites normativos (con referencia a la Ley Federal mexicana contra la delincuencia organizada). En Jakobs, G. & Polaino-Orts, M. Polaino-Orts (Eds.), *Criminalidad organizada: formas de combate mediante el Derecho penal*. Editorial Flores.
- Rodríguez, C. (2019). Un breve análisis de la “Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas” regulada en la Ley 30424. *Derecho & Sociedad*, (52), 231-235. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/21224>
- Ruiz, H. (2017). El compliance eficaz como causa de irresponsabilidad de las personas jurídicas: La urgente necesidad en Colombia de castigar penalmente a las empresas. *Foro de Fundación Internacional de Ciencias Penales*, 1, 790-818. <https://ficip.es/wp-content/uploads/2017/09/Foro-FICP-2017-1.pdf>
- Salazar, N. (6 de diciembre de 2023). *La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el VerSanG de Alemania* [congreso]. I Congreso de Derecho Penal y Procesal Penal por el vigésimo aniversario del Taller de Dogmática Penal. <https://www.facebook.com/taller.dogmatica-penal/videos/672469314877030>
- Santa Rita, G. (2012). *Delito de organización terrorista: Un modelo de derecho penal del enemigo* [Tesis de doctorado]. Universidad de Sevilla. <https://hdl.handle.net/11441/71110>
- Schmitt-Leonardy, C. (2023). ¿Culpabilidad colectiva? Sobre la “culpabilidad” de las empresas. En Saliger, F., Ruiz, C., Pastor, N. & I. Coca (Eds.), *La responsabilidad penal de personas jurídicas: Fundamentos filosóficos* (Vol. 1, pp. 317-338). Colección Externado - Tirant Derecho.
- Silva, J. (1995). Responsabilidad penal de las empresas y de sus órganos en Derecho español. En Schünemann, B., Silva, J. & J. De Figueiredo (Coords.), *Fundamentos de un sistema europeo del Derecho penal: Libro-Homenaje a Claus Roxin*. J.M. Bosch.

Torres, E. (2020). La regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de terrorismo. El terrorismo, ¿riesgo en el tráfico jurídico empresarial? *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, 1(73), 139-172.

Vacchelli, E. (2020). *Intervención delictiva: Significado y función del principio de accesoriedad*. Atelier.

Wohlens, W. (2023). Fines de la pena y clases de sanciones en el Derecho penal de la empresa. En Saliger, F., Ruiz, C., Pastor, N. & I. Coca (Eds.), *La responsabilidad penal de personas jurídicas: Sistema de sanciones* (Vol. 2). Externado - Tirant Derecho.

Yacobucci, G. (2005). Los tipos penales relacionados con el crimen organizado. En G. Yacobucci (Coord.), *El crimen organizado: Desafíos y perspectivas en el marco de la globalización* (pp. 73-124). Ábaco de Rodolfo Depalma.

Yaipén, V. (2020). *El delito de Organización criminal: Injusto de sistema y autopoietico*. Ideas Solución.

LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y OTROS DOCUMENTOS LEGALES

Código Penal [C.P.]. Decreto Legislativo 635, 8 de abril de 1991 (Perú).

Decreto Ley 25475, Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para

la investigación, la instrucción y el juicio, Diario Oficial *El Peruano*, 6 de mayo de 1992 (Perú).

Leo-Castela, J. I., & Sánchez Macías, J. I. (2020). *Autoregulación e imputación penal de la persona jurídica en España y Chile*. Polít. Crim., 15(30), 639-669. <http://politycrim.com/wp-content/uploads/2020/12/Vol15N30A5.pdf>

Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, Diario Oficial *El Peruano*, 21 de abril del 2016 (Perú).

Ley 31740, Ley que modifica la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, para fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas y promover el buen gobierno corporativo, Diario Oficial *El Peruano*, 13 de mayo del 2023 (Perú).

Quinto Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, 13 de noviembre de 2019, Acuerdo Plenario 1-2009/CJ-116 (Perú).

Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 29 de diciembre de 2022, Recurso de Nulidad 607-2022 (Perú).

Serrano- Piedecabras, J. (1997). Sobre la responsabilidad penal de las persona jurídicas. THĒMIS-Revista de Derecho, (35), pp. 127-136.